

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**RAMA JUDICIAL**

**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN -**

Medellín, catorce (14) de diciembre dos mil veintidós (2022)

Apelación auto

Exp.006-2021-00251-01

Vencido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, se resuelve el recurso de apelación interpuesto por PROTECCIÓN S.A. por medio de su mandataria judicial, contra el auto que resolvió no librar mandamiento ejecutivo dentro del proceso ejecutivo que adelantó en contra de LUZ MARY MONA RESTREPO.

**ANTECEDENTES:**

PROTECCIÓN S.A promovió demanda ejecutiva a fin de perseguir el pago de unas contribuciones parafiscales de la protección Social no saldadas con los correlativos intereses moratorios causados.

Por auto del 12 de julio de 2022 el Juzgado de Conocimiento se abstuvo de librar mandamiento ejecutivo atendiendo a los estándares fijados por la UGPP en la Resolución N° 2082 de 2016, en tanto encontró excedidos los términos allí fijados para constituir el Fondo Privado el título ejecutivo en su favor, al haber dejado pasar entre 7 y 17 años para su expedición por lo que no reconoció esa calidad en la documental arribada y no dedujo su exigibilidad vía ejecutiva.

La representante judicial de la activa se apartó de la decisión e interpuso recurso de reposición y en subsidio suyo el de apelación, aduciendo que el documento arribado como título ejecutivo sí cumple con lo exigido por el ordenamiento jurídico

colombiano atendiendo el contenido del artículo 24 de la Ley 100 de 1993 y lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto 2633 de 1994. Aduce que la Resolución N° 2082 de 2016 a la que se alude para negar el mandamiento de pago se encuentra derogada por lo que debe acudirse es a la N° 1702 de 2021 que aclara los parámetros de cobro que deben seguir los fondos para efectuar el cobro coactivo, donde se resalta que basta con la expedición del título para que el juez libre mandamiento, a más que aduce que el título también cumple con lo preceptuado en el artículo 422 del CGP al constituirse en una obligación clara, expresa y exigible, sin que sea dable el requerimiento de requisitos adicionales a partir de lo cual solicita la revocatoria de la decisión, para en su lugar, librar mandamiento de pago.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

#### CONSIDERACIONES:

Sea lo primero aclarar que la providencia cuestionada, es susceptible de la alzada conforme a lo previsto en el numeral 8° del artículo 65 del CPTSS, según el cual, es apelable el auto que decida sobre el mandamiento de pago.

Pues bien, atendiendo los argumentos de la alzada, se tiene que con miras a determinar la viabilidad de librar mandamiento de pago dentro de los trámites de ejecución en los que se persigue por mora el pago de las contribuciones a la seguridad social, se ha acudido a lo reglado en los artículos 100 y 101 CPT y de la SS., donde se ha dispuesto que es exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo que conste en un acto o documento proveniente del deudor o su causante o que emane de decisión judicial o arbitral en firme.

También se atiende el artículo 24 de la Ley 100 de 1993 que reza: *“Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la administradora*

*determine el valor adeudado, prestará mérito ejecutivo”. En igual sentido, el artículo 2° del Decreto 2633 de 1994 que reglamentó la disposición en cita compilado en el decreto N° 1833 de 2016, establece que: “vencidos los plazos señalados para efectuar las consignaciones respectivas por parte de los empleadores, la entidad administradora, mediante comunicación dirigida al empleador moroso lo requerirá, si dentro de los quince (15) días siguientes a dicho requerimiento el empleador no se ha pronunciado, se procederá a elaborar la liquidación, la cual prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993”.*

A más de lo anterior, conforme a lo estipulado en el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012, por medio de la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones, *“Las administradoras del Sistema de la Protección Social continuarán adelantando las acciones de cobro de la mora registrada de sus afiliados, para tal efecto las administradoras estarán obligadas a aplicar los estándares de procesos que fije la UGPP. La UGPP conserva la facultad de adelantar el cobro sobre aquellos casos que considere conveniente adelantarlos directamente y de forma preferente, sin que esto implique que las administradoras se eximan de las responsabilidades fijadas legalmente por la omisión en el cobro de los aportes”.*

En virtud de esa disposición, la UGPP procedió a fijar los estándares de cobro, inicialmente por medio de la Resolución N° 444 del 28 de junio de 2013, subrogada por la Resolución N° 2082 de 2016, última que bajo igual figura fue sustituida por la N° 1702 de 2021, con el fin de integrar en un solo acto todas las disposiciones que le conciernen, con los que se busca mejorar dentro de los procesos de cobro la gestión de cobro y optimizar el recaudo de la cartera en mora y de esta manera disminuir la evasión y cumplir con los fines del Sistema.

Para el aspecto que interesa a la Sala, los artículos 9, 10 y 11 dentro del capítulo del *“Estándar de acciones de cobro”* de la resolución disponen:

*“ARTÍCULO 9. OBJETIVO. El estándar de acciones de cobro tiene como finalidad propiciar el pago voluntario e inmediato de la obligación que el aportante adeuda al Sistema de la Protección Social, y el inicio de las acciones judiciales o de jurisdicción coactiva a que hubiere lugar.*

*ARTÍCULO 10. CONSTITUCIÓN TÍTULO EJECUTIVO. La Unidad verificará que las administradoras privadas y públicas hayan expedido en un plazo máximo de nueve (9) meses contados a partir de la fecha límite de pago, la liquidación o acto administrativo que preste mérito ejecutivo, según el caso, sin perjuicio de lo dispuesto en las normas legales aplicables al respectivo subsistema.*

*Para iniciar las acciones de cobro coactivo o judicial será suficiente la constitución del título que presta mérito ejecutivo. Las acciones persuasivas y el aviso de incumplimiento no son actuaciones que complementen el título.*

*ARTÍCULO 11. ACCIONES PERSUASIVAS. Una vez las Administradoras constituyan el título que presta mérito ejecutivo, deben contactar al deudor como mínimo dos veces. El primer contacto lo deben realizar dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la constitución o la firmeza del título ejecutivo, según se trate de entidad privada o pública, respectivamente, y el segundo, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en que se realizó el primer contacto, sin superar cuarenta y cinco (45) días calendario, de conformidad con los criterios que se definen en el Anexo Técnico Capítulo 3.*

*ARTÍCULO 13. ACCIONES JURÍDICAS. Vencido el plazo anterior las administradoras contarán con un plazo máximo de cinco (5) meses para dar inicio a las acciones de cobro coactivo o judicial, según el caso”.*

A partir de lo anterior y del íntegro contenido de ese acto administrativo, lo que fluye claro es que las Administradoras de la Protección Social públicas y privadas están obligadas al cumplimiento de los estándares de cobro allí definidos, por lo que la liquidación de lo adeudado que emerge a partir del artículo 24 de la Ley 100 de 1993, debe realizarse en armonía con las prerrogativas establecidas en la Resolución N° 1702 de 2021, ya que sin la satisfacción del procedimiento allí plasmado no resultaría procedente el cobro de los aportes a los empleadores morosos por esta vía.

De acuerdo a lo anterior, lo que en este particular se muestra es que Protección S.A., con fecha del 03 de junio de 2021, expidió la liquidación que presta mérito ejecutivo (Pág. 13), incluyendo un capital por aportes en pensión obligatoria de la trabajadora Luz Lizcano Yague de \$9.285.118 por los períodos de mayo de 2002 a julio de 2013 (Págs. 15-19 Archivo 02), así como \$32.378.200 por intereses moratorios calculados al 16 de febrero de 2021 (Pág. 13 archivo 02), cuyo requerimiento por mora se promovió en una oportunidad el 02 de marzo de 2021

(Pág. 20 archivo 02) enviado a la dirección registrada en el Certificado de Matrícula de Persona Natural (Pág. 21 archivo 02).

A partir de esa información, lo que concluye esta colegiatura es que la decisión de Primera Instancia resulta acertada, en tanto no se verifica la observancia de los estándares previstos para las acciones de cobro previamente transcritas.

Es verdad que el artículo 10 del Acto Administrativo plurimentado advierte ser suficiente la constitución del título que presta mérito ejecutivo, por lo que para dar inicio a la acción judicial no es dable la exigencia de ser arribados los avisos de cumplimiento, aun cuando en este asunto se echa uno de menos, también es cierto que la Resolución N°2082 de 2016 fue subrogada por la Resolución N°1702 de 2021 a través de la que no se releva el cumplimiento estricto de los tiempos y términos establecidos para proceder con la expedición del título ejecutivo, que no puede superar los nueve (9) meses, contados desde la data en que debió ser cubierta la obligación, por lo que estando ante un deber legal incumplido desde 2002 y hasta 2013, no le era dable a la administradora ejecutante que pasados entre 8 y por lo menos 19 años desde cuando inició la mora, emitiera la liquidación y pretenda darle el carácter de exigible para su cobro por vía ejecutiva, bastando entonces acudir a las regulaciones administrativas que la UGPP tiene dispuestas, para corroborar que el título ejecutivo contrario a lo que aduce la recurrente no es actualmente exigible y en ese orden, no se cumplen las expectativas del artículo 442 del CGP que impone que son las obligaciones expresas, claras y exigibles las que pueden demandarse ejecutivamente

Bajo tal reflexión, ante la abstención de llevar el procedimiento regido a efectos de constituir el título ejecutivo, es que resulta pertinente y apegado a la legalidad CONFIRMAR la decisión apelada en tanto se abstuvo de librar mandamiento de pago.


Las costas en esta instancia conforme a lo que establece el artículo 365-3 del CGP estarán a cargo del actor, fijándose las agencias en derecho en la suma de \$200.000.

**DECISIÓN:**

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, **CONFIRMA** el auto apelado de fecha y procedencia conocidas. Las costas en esta instancia estarán a cargo del ejecutante, se fijan las agencias en derecho en la suma de \$200.000

La presente decisión queda notificada en los **ESTADOS ELECTRÓNICOS**.

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIERREZ SALAZAR

Certifico: Que la sentencia anterior fue notificada por ESTADOS N° 226 fijados el 15 de diciembre de 2022 en la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

---

El Secretario.